



V JORNADAS DE ECONOMÍA CRÍTICA

LA CRISIS GLOBAL COMO CRISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

JUICIO ÉTICO Y POPULAR A LAS
TRANSNACIONALES: UNA EXPERIENCIA DE
DENUNCIA COLECTIVA CONTRA EL
EXTRACTIVISMO

PATRICIA AGOSTO

23, 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2012 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA

Juicio Ético y Popular a las Transnacionales: una experiencia de denuncia colectiva contra el extractivismo

Patricia Agosto¹

Resumen

El Juicio Ético y Popular a las Transnacionales fue una experiencia colectiva de denuncia contra el extractivismo y las empresas transnacionales. A través de su desarrollo fue posible dar voz a las comunidades directamente afectadas por el modelo y sus actores y corroborar que sus formas de operar generan impactos negativos irreversibles en el medio ambiente y en la salud de las poblaciones, violación de todo tipo de derechos, destrucción de territorios y saqueo de los bienes comunes naturales, vulneración de la soberanía local, nacional y popular y mercantilización de la vida y la naturaleza. A su vez, se visibilizaron las estrategias de las corporaciones para lograr la licencia social que no tienen, como la responsabilidad social empresaria y los dispositivos de control social, judicialización y criminalización de la protesta social y militarización de los territorios en conflicto. También se documentaron las responsabilidades de los poderes políticos por ser garantes de las formas de operar de las empresas, así como de algunas universidades públicas y de los medios masivos de comunicación que, mediante la producción de conocimiento científico y la trasmisión de mensajes falsos, ocultan y tergiversan información y asocian a las corporaciones con el “desarrollo” que necesitan nuestras comunidades.

¹ Investigadora del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, CIFMSL, e integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Buenos Aires.

Las empresas transnacionales ocupan un lugar central en el modelo extractivista exportador implementado en Nuestra América. Partiendo de esta certeza, durante el año 2011 llevamos a cabo un Juicio Ético y Popular a las Transnacionales, desde el Proyecto "Resistencias Populares a la Recolonización del Continente" del CIFMSL y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía². El objetivo de este proceso de justicia popular fue denunciar públicamente las formas de operar de las corporaciones transnacionales, a través de un proyecto de investigación acción-participativa en el cual pudieron hacerse escuchar las voces de las víctimas directas de este modelo extractivo exportador que vienen construyendo resistencias ante sus avances y expansión.

Coincidiendo con muchos de los análisis que se vienen haciendo desde el pensamiento crítico, partimos de considerar que este **modelo extractivista exportador** se apoya en la acumulación por desposesión³ y en la reprimarización de las economías de Nuestra América⁴, tras haberla reconvertido en proveedora de materias primas a los países del norte y a las potencias emergentes, como China, India y el propio Brasil.

Este **modelo de acumulación capitalista actual** tiene algunas características que se van agudizando a medida que se profundiza: una importante concentración del capital, tanto en el plano de la producción como en el de la comercialización de las materias primas, a través de un proceso de fusión y absorción en unas pocas grandes empresas; alta concentración de las tierras ya que el capital se apropiá de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua a través de grandes explotaciones agrícolas, forestales y mineras, que muchas veces implican la expulsión de comunidades indígenas y campesinas de sus territorios; y la articulación entre diferentes explotaciones extractivas que permite satisfacer las necesidades que tienen para llevar adelante los emprendimientos⁵.

Respecto a los **agronegocios**, su desarrollo implica la presencia de corporaciones que abarcan toda la cadena de producción y comercialización de productos, desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo en muchos casos la

² La información sobre este proceso de justicia popular se encuentra en: www.juicioalastransnacionales.org

³ David Harvey (2004): "El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión". En: *SOCIALIST REGISTER*, <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>

⁴ Maristella Svampa (s/f): *La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes*. En: <http://www.maristellasyvampa.net/archivos/ensayo43.pdf>. Esta investigadora se refiere al proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, entre otros muchos autores.

⁵ Un ejemplo es el acuerdo Vale-Repsol para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado, ubicado en el sur de la provincia de Mendoza y en manos de la transnacional brasileña Vale S.A. Este emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y la tendencia al monocultivo, en especial de la producción de agrocombustibles. En: *Sentencia final de la Audiencia regional de Patagonia del Juicio Ético y Popular a las transnacionales*. <http://juicioalastransnacionales.org/2011/09/sentencia-del-juicio-etico-y-popular-a-las-transnacionales-en-patagonia/>

construcción de la infraestructura necesaria para el traslado de las materias primas hacia los países importadores. En este ámbito se ha venido impuesto un paquete tecnológico que incluye la producción, el control y la imposición de semillas transgénicas y de los herbicidas y plaguicidas a los que resisten, por parte de unas pocas compañías transnacionales, como es el caso de la transnacional Monsanto⁶. A su vez, el desarrollo de monocultivos exportables y la imposición de un modelo agroalimentario hegemónico provocan el descenso en la producción de alimentos y su consecuente alza de precios; atentan contra la soberanía alimentaria de nuestros pueblos; y destruyen la agricultura familiar y campesina que han dado de comer al mundo durante milenios⁷.

La expansión de la **megaminería a cielo abierto** es otra característica del actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de superficie y alta ley ha generado la utilización de un método de extracción que permite obtener el mineral diseminado mediante la llamada minería a cielo abierto, que es una minería a gran escala que implica la realización de enormes perforaciones a través de voladuras con explosivos y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) la roca del mineral, utilizando enormes cantidades de agua y de energía⁸.

Además y como parte de este modelo, la **expansión de la frontera hidrocarburífera** ha favorecido claramente a las operadoras privadas y en especial extranjeras, a partir de la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, acrecentando la capacidad de negociación de las operadoras privadas. Profundizando las políticas extractivistas de este sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación⁹.

⁶ Esta transnacional, creadora de varias semillas transgénicas y del Roundup, nombre comercial del glifosato, fue enjuiciada en dos de las audiencias regionales de este proceso de justicia popular: la Triple Frontera y el Noroeste.

⁷ *Sentencia del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales Audiencia de la Triple Frontera.* En: <http://juicioalastrnacionales.org/2011/10/sentencia-del-juicio-etico-y-popular-a-las-transnacionales-audiencia-de-la-triple-frontera/>

⁸ *Sentencia final del Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales.* En: <http://juicioalastrnacionales.org/2011/11/sentencia-final-del-tribunal-del-juicio-etico-a-las-transnacionales/>

⁹ Presentación de la fiscalía popular de Repsol y Pan American Energy en la Audiencia regional de Patagonia.

La expansión de las fronteras sojera, minera y forestal ha implicado graves pérdidas de bosque nativo y de biodiversidad, así como el desplazamiento de poblaciones cuya supervivencia siempre estuvo relacionada al monte y a los bosques. En muchos casos, esa deforestación está acompañada por la imposición de especies exóticas que termina convirtiendo a la región en desiertos uniformes de monocultivos forestales¹⁰.

El crecimiento de todos estos proyectos extractivos ha generado un aumento permanente de los **conflictos territoriales** entre las corporaciones y las comunidades allí asentadas, que expresan, mediante diversas formas de lucha, la oposición a la violación de los derechos humanos, ancestrales y de la naturaleza que implican los megaproyectos y las megaexplotaciones.

A través de la investigación acción participativa que sostuvo la construcción de este juicio popular encontramos que las organizaciones populares fueron dando, en la propia lucha, un nuevo sentido a conceptos tales como *territorio, autonomía, soberanía*, a la vez que fueron despojándose de algunos conceptos a los que remplazaron por otros más acordes con sus demandas y convicciones: *recursos naturales* por *bienes comunes naturales*, *conflictos ambientales* por *conflictos socioambientales*. Además, a medida que se profundizaron las demandas de las organizaciones en lucha, se fue poniendo en tela de juicio este “modelo de desarrollo” que nos imponen por ser incompatible con la preservación y la defensa de la vida y la naturaleza.

Las primeras preguntas que nos hicimos en la construcción del juicio ético popular, que puso en el banquillo de los acusados, por un lado a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes comunes y de los derechos de las poblaciones y por otro, al sistema capitalista, patriarcal y neocolonial del que son eslabones claves, fueron porqué un juicio, porqué ético y porqué popular.

Y fuimos construyendo colectivamente las respuestas. Un **juicio** porque la justicia ordinaria, sus leyes y sus códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden patriarcal y racista y ese hecho hace necesario dar voz a las comunidades afectadas que son desoídas por esa justicia, que además criminaliza y judicializa a lo/as pobres y a lo/as luchadore/as sociales que se rebelan frente a las injusticias de este sistema.

Un juicio **ético** porque si lo antiético aniquila o tiende a mediano y largo plazo a aniquilar la vida, el carácter ético implica defenderla.

Y un juicio **popular** porque se defienden los intereses de los pueblos y las luchas que nacen en su seno, y porque estuvo hecho por y para los movimientos sociales que reivindican la capacidad de esos pueblos de ejercitar sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.

¹⁰ Presentación de la fiscalía popular de Alto Paraná en la Audiencia regional de la Triple Frontera.

Así encuadramos este proceso de justicia popular y partimos de la siguiente afirmación: "*Sí la enajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial capitalista, un Juicio Ético y Popular contra sus principales operadores tiene por finalidad apoyar las luchas contracoloniales y abrir nuevas brechas de emancipación*"¹¹.

Este juicio popular tuvo tres **audiencias** regionales, en el Noroeste, en Patagonia y en la Triple Frontera, y una de síntesis en Buenos Aires, en la cual se enjuició al modelo en su conjunto desde una mirada latinoamericana, ya que se incluyeron las voces de integrantes de organizaciones populares en lucha contra el extractivismo de Brasil, Colombia, Paraguay, Honduras y México.

Las **empresas enjuiciadas** fueron elegidas en cada una de las regiones y la selección se basó en abarcar distintas actividades extractivas, teniendo en cuenta el protagonismo que cada una de las empresas tenía en los distintos contextos regionales. En las jornadas preparatorias que se desarrollaron en cada región se tomaron algunas decisiones que dieron forma a la propuesta inicial: se incluirían proyectos, es decir, se enjuiciaría a empresas que no han entrado en la fase de explotación, pero que ya están operando en otras regiones del continente y han generado los suficientes impactos negativos como para que sirvan de antecedentes de lo que ocurrirá en nuestro país en caso de avanzar más allá de la fase de exploración y construcción de infraestructura; se decidió incluir al Ingenio Ledesma S.A.A.I. entre las empresas enjuiciadas en el NOA, ya que, a pesar de ser una corporación de capitales argentinos, tiene amplios vínculos con empresas transnacionales, reproduce sus formas de operar, es un caso emblemático de complicidad con la dictadura cívico-militar de 1976-1983 y es una protagonista en la represión y criminalización de los movimientos populares en la actualidad; se resolvió que las empresas no tuvieran una instancia de defensa en el juicio, ya que sobran los espacios en los cuales pueden expresar y defender sus intereses; y se determinó que algunas empresas serían enjuiciadas en más de una audiencia regional, en función del peso que tienen en distintas provincias y regiones del país, fue el caso de Repsol -enjuiciada en el NOA y en Patagonia- y de Monsanto -enjuiciada en el NOA y la Triple Frontera.

En cuanto a empresas dedicadas a la **megaminería**, fueron llevadas al banquillo de los acusados Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Vale S.A y su Proyecto Potasio Río Colorado y la Pan American Silver y su Proyecto Navidad; entre las empresas de **agronegocios y forestales**, Monsanto, Cargill, Alto Paraná y Ledesma, y entre las **petroleras** Repsol y Pan American Energy.

Desde el punto de vista metodológico, el juicio fue producto de un verdadero trabajo colectivo, a partir de la constitución de **fiscalías populares**, integradas por movimientos

¹¹ *Sentencia final del Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales.*

campesinos, organizaciones de derechos humanos, asambleas, colectivos de investigación, foros ambientales, muchas de las cuales protagonizan las resistencias territoriales frente a las empresas transnacionales. Estas fiscalías fueron las encargadas de realizar las investigaciones de cada uno de los casos enjuiciados, a partir de una grilla con distintos aspectos a investigar, que permitía unificar criterios de búsqueda y selección de información a presentar en las audiencias¹², y de convocar a los **testigos** -comunidades indígenas, organizaciones campesinas, asambleas de vecino/as autoconvocado/as, foros, ong's y colectivos ambientalistas- cuyos testimonios sostenían, desde las resistencias territoriales, las denuncias de las fiscalías.

Cada una de las audiencias regionales y la audiencia final contaron con la participación de un **tribunal popular**, constituido por integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas, abogado/as y miembros representativos de cada comunidad, cuya misión fue hacer una síntesis de las argumentaciones y acusaciones expresadas en cada audiencia y leer la **sentencia** final con la que culminó el proceso en cada una de ellas.

Durante el desarrollo de las audiencias se fueron manifestando las distintas denuncias contra las transnacionales y el modelo de acumulación actual en la voz de las fiscalías populares y de los casos testigos, que quedaron plasmadas en la Sentencia final de este proceso de justicia popular.

Entre los **impactos** generados por el modelo extractivo exportador, que tiene como actores principales a las corporaciones transnacionales y los estados, se destacan las violaciones a los derechos tanto individuales como colectivos, incluyendo los derechos de los pueblos originarios.

Entre los derechos humanos violados por el modelo y las corporaciones podemos mencionar: las migraciones forzadas, el éxodo y la expulsión rural; la destrucción de las formas de vida tradicionales de las comunidades, así como la compra de voluntades a través de la corrupción; la profundización de la precarización y flexibilización laboral; la destrucción de las economías regionales; la violación del derecho a la salud y a un ambiente sano, como consecuencia del uso de agrotóxicos, las contaminaciones provocadas por la megaminería y las pruebas de medicamentos en poblaciones, entre otras causas.

También fue larga la lista de denuncias sobre violaciones a los derechos civiles, políticos y culturales, entre ellos: desterritorialización del estado y desestimación del territorio, que se manifiesta en la pérdida de la capacidad de regulación y control de los territorios por parte de los estados y en un grave deterioro de la soberanía nacional y popular; corrosión institucional y corrupción política; control social y estigmatización de perspectivas críticas, visiones diferentes y

¹² Los ejes incluidos en la grilla fueron: perfil corporativo de la empresa, características de los territorios donde operan, estrategias empresariales, impactos que generan sus formas de operar, responsabilidades de distintas instancias de poder que garantizan a las empresas poder actuar libre e impunemente y surgimiento de resistencias populares en los territorios.

organizaciones y sujetos que las expresan; afectación del territorio de las comunidades indígenas, base de su cosmovisión e identidad cultural y social; creación de escenarios propicios para el consumo de drogas, el juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la prostitución, como consecuencia de la presencia predominante de hombres solos en las áreas de trabajo de las empresas; afectación del patrimonio arqueológico.

También los derechos ancestrales de los pueblos originarios son claramente violados por las empresas transnacionales, a través del incumplimiento de convenios y pactos internacionales que protegen sus derechos, como el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007; así como también son violados los derechos de la naturaleza, a través de la destrucción de los bienes comunes naturales y los ecosistemas y las graves afectaciones a los suelos, el aire y el agua que traen los mega emprendimientos.

Las **estrategias** implementadas por las empresas para lograr la licencia social que no tienen ocuparon un lugar destacada en las denuncias de las fiscalías populares.

Entre ellas, el nuevo disfraz verde del capitalismo, que pretende convertir al mercado en el principal medio para resolver la crisis ambiental global, fue claramente expresado. En este sentido, se denunció el patentamiento de semillas, la biopiratería, la apropiación de los saberes ancestrales y las políticas de compensación ambiental como los bonos verdes, que pueden ser caracterizados por un lado, como un permiso para contaminar y por el otro, como una forma de "pedir disculpas" por ello. Todas estas estrategias son sólo una forma clara y concreta de mercantilizar la vida y la naturaleza llegando a límites desconocidos hasta hace poco tiempo.

Otras estrategias, en las cuales es fácil observar la complicidad de los poderes políticos con las formas de operar de las corporaciones, son: el pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la elaboración de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos; y el mecanismo que se conoce como "puertas giratorias" que implica que altos funcionarios de la administración pública pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que da la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales.

La construcción de la infraestructura necesaria para concretar el saqueo de nuestros bienes comunes es otra estrategia implementada con la complicidad de los estados. Así, los proyectos de la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que se construyen con dinero obtenido de préstamos de los organismos financieros internacionales, incrementan el endeudamiento de los países en pos de construir carreteras, hidrovías, puentes, puertos, gasoductos, oleoductos, megarepresas, acueductos, telecomunicaciones, que permiten el saqueo rápido y barato de nuestras riquezas naturales. Según los documentos oficiales, se trata de una

estrategia geopolítica que busca potenciar y elevar la competitividad y productividad a través de la integración física de la región; sin embargo, y de acuerdo a muchas consecuencias que han traído los proyectos que ya se están implementando, se trata de un nuevo reordenamiento territorial que responde a intereses ajenos a los de las poblaciones y comunidades que habitan los territorios afectados¹³.

Otra estrategia que implementan las empresas transnacionales es la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), que implica poner en práctica proyectos “comunitarios” que les permiten crear una imagen “benefactora”, a través del desarrollo de políticas de cooptación y asistencialismo respecto de las poblaciones afectadas. El objetivo es lograr el apoyo de las comunidades a través de estos “beneficios”, que intentan convencerlas de que el desarrollo local está asociado a su presencia en los territorios.

Una estrategia más y de un nivel de gravedad extremo es el aumento de la criminalización y judicialización de la protesta social, a través de la represión y las amenazas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Esta criminalización y judicialización en muchos casos es acompañada de la militarización de los territorios en conflicto, en la que participan tanto fuerzas de seguridad públicas provinciales y nacionales -manifestando otra vez la complicidad de los poderes políticos- y fuerzas represivas privadas contratadas por las propias empresas. Además, durante este proceso de justicia popular ha sido denunciada la continuidad de agentes de la represión que intervinieron durante el terrorismo de estado, ahora en la defensa de los intereses de muchas de las empresas transnacionales enjuiciadas.

En la avanzada militarista y represiva en nuestro país, que beneficia los intereses de las transnacionales, no podemos dejar de mencionar la aprobación de la Ley Antiterrorista en diciembre de 2011, que favorece la represión y duplica las penas aplicables a actos considerados terroristas. A pesar de que en sus fundamentos aclara que “quedan fuera de toda interpretación criminalizante los hechos de protesta social” siempre que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, la ley tiene una clara potencialidad represora apoyada en la peligrosamente difusa definición de qué es un acto terrorista. Además, la figura de financiamiento al terrorismo también es muy amplia y tiene como objetivo hostigar a las organizaciones no gubernamentales o de otro tipo que apoyan y se solidarizan con los movimientos populares que protagonizan las resistencias al modelo extractivista y a todas las formas que adopta la precarización de la vida en su conjunto.

Respecto a las **responsabilidades** hubo varias instancias de poder que fueron denunciadas. En cuanto a los gobiernos, parlamentos y sistema de justicia, es clara su incidencia favorable a las

¹³ Para obtener una información más detallada de esta iniciativa, se puede consultar la página: <http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP>

corporaciones, a través de distintos mecanismos: la aprobación de una normativa jurídica que las favorece, o la ignorancia de legislación existente que defiende los intereses de las poblaciones y de la naturaleza; la profundización del modelo extractivista exportador; la garantía que brindan al despojo y la impunidad con que operan las empresas; la complicidad demostrada en la construcción de la infraestructura para el saqueo y en las políticas de represión, judicialización y militarización implementadas para imponer un “modelo de desarrollo” largamente rechazado por las comunidades afectadas; y la colaboración con los intereses de las empresas al no exigir la realización de evaluaciones serias de impacto ambiental y social de sus proyectos, así como el ocultamiento de esa información y la ausencia de consultas públicas que permitan conocer las opiniones de las poblaciones que serán afectadas por los megaemprendimientos. Los estados cumplen de este modo una doble función: disciplinadores de las poblaciones y los territorios y legitimadores de los megaproyectos.

Algunas universidades públicas también fueron denunciadas por implementar mecanismos de ocultamiento, tergiversación y producción de conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas, así como por aceptar fondos provenientes de empresas que contaminan y saquean nuestros bienes comunes.

Los medios masivos de comunicación también tuvieron su lugar en el banquillo de los acusados, ya que la complicidad con las empresas queda de manifiesto en los mensajes transmitidos que asocian el “desarrollo”, la generación de empleo y la posibilidad de superar la pobreza y miseria de muchas localidades, con la presencia de las empresas, ocultando los impactos negativos que los proyectos transnacionales han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo extractivista. No podemos dejar de mencionar el rol que han tenido esos medios en la estigmatización de los luchadore/as sociales, asociando las protestas y sus formas de manifestación con hechos delictivos y con una necia oposición al “desarrollo y crecimiento” de nuestro país.

A lo largo de las audiencias ha quedado demostrada esa rebelde necesidad de las poblaciones y comunidades que se han organizado, se han formado, reclaman justicia y se movilizan tomando las calles y las rutas, contra las políticas de recolonización que tienen en las empresas transnacionales a uno de sus principales protagonistas; a la vez que van construyendo en los propios territorios en lucha otras formas de entender y de vivir el mundo, basadas en la solidaridad y la relación armónica con la naturaleza, en defensa de los territorios de los que se saben formando parte y en los que se construye su identidad y su sentido de la vida.

La **sentencia final** de este proceso de justicia popular es muy categórica en sus definiciones y denuncias. Desde una mirada que abarca lo que viene sucediendo en Nuestra

América, se enuncian los crímenes de las empresas transnacionales que se han denunciado y comprobado a lo largo de todo el juicio: saqueo, destrucción y contaminación de los bienes comunes naturales; el desplazamiento forzado de poblaciones; el vaciamiento de territorios; los golpes de estado y las intervenciones militares; los femicidios, asesinatos, represión y judicialización de luchadore/as sociales; la mercantilización de todas las dimensiones de la vida; y la negación de culturas e identidades diversas. Considerando que la violencia ha sido y es central en los dispositivos coloniales y neocoloniales, se asevera que además ha sido el medio principal de producción de sentidos que naturaliza las relaciones sociales de opresión, dominación y explotación.

Se afirma que esos crímenes tienen el alcance de un verdadero **genocidio** y **ecocidio** y que pueden ser considerados como **delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza**, debido a las dimensiones de destrucción, afectación masiva de la salud y muertes que ocasionan, según fue demostrado a través de las innumerables pruebas presentadas por las fiscalías populares durante el proceso de justicia popular.

Luego de condenar a las empresas transnacionales, por ser protagonistas de la continuidad y profundización del colonialismo histórico bajo la forma actual del capitalismo neoliberal, el Tribunal Ético y Popular realiza una serie de sugerencias y recomendaciones.

Por un lado, trabajar en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.

Por otro, demandar a los gobiernos para que garanticen la soberanía y la dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos privados; que aseguren la aplicación de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, ancestrales y de la naturaleza; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza; y que rectifiquen los tratados existentes por ser violatorios de las más elementales normas del derecho.

Además, se exige la suspensión de los megaproyectos de “desarrollo” de agronegocios, megaminería, explotación forestal y de hidrocarburos y de construcción de infraestructura de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso serio de evaluación de impacto ambiental y social con real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas; exige la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respetan los convenios y normas internacionales que defienden sus derechos y que han sido ratificados por nuestro país; exige a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades; que se prohíba la explotación en los territorios indígenas, en las zonas

productoras de agua y en las zonas forestales protegidas; y que se reconozca el derecho de recurrir directamente a los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales violaciones de derechos causadas por las corporaciones transnacionales.

La sentencia final culmina con un compromiso: las y los participantes de este juicio, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos e investigadore/as, nos declaramos en estado de movilización, de solidaridad y de encuentro, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente y levantar una voz unánime en Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria y popular, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y de lucha y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

Creemos que este juicio ético y popular fue una expresión de las diversas luchas contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte implícitas en el modelo extractivo exportador y una afirmación vehemente de que las transnacionales y los gobiernos cómplices no pueden comprar nuestras voluntades ni nuestra decisión de vivir con dignidad, así como tampoco podrán robar nuestra esperanza ni nuestra capacidad de lucha.

Sabemos que estamos ante una crisis civilizatoria que tiene muchas aristas, pero precisamente por tratarse de la terapia intensiva de una civilización de explotación y opresión que nos quiere hacer creer que la mercantilización de la vida salvará a la humanidad de los males que esa misma civilización ha generado, es que los pueblos, con la convicción de que la vida no se negocia, venimos creando otra civilización en nuestros propios territorios y en nuestros propios procesos de lucha. Es por esa razón que tenemos que globalizar la lucha para lograr la muerte definitiva de este sistema y el definitivo nacimiento de la civilización que queremos, la que prioriza la vida de la humanidad en la naturaleza.

Bibliografía

Harvey, David (2004): "El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión". En: *SOCIALIST REGISTER*,

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>

IRSA: <http://www.irsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP>

Juicio Ético y Popular a las Transnacionales. En: www.juicioalastransnacionales.org

Sentencia final del Tribunal del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales, Audiencia de Buenos Aires. En: <http://juicioalastransnacionales.org/2011/11/sentencia-final-del-tribunal-del-juicio-etico-a-las-transnacionales/>

Sentencia final de la Audiencia regional del NOA. En: <http://juicioalastransnacionales.org/2011/09/sentencia-del-tribunal-del-juicio-etico-a-las-transnacionales-noa/>

Sentencia final de la Audiencia regional de Patagonia. En:

<http://juicioalastransnacionales.org/2011/09/sentencia-del-juicio-etico-y-popular-a-las-transnacionales-en-patagonia/>

Sentencia final de la Audiencia regional de la Triple Frontera. En: <http://juicioalastransnacionales.org/2011/10/sentencia-del-juicio-etico-y-popular-a-las-transnacionales-audiencia-de-la-triple-frontera/>

Svampa, Maristella (s/f): *La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes.* En: <http://www.maristellavampa.net/archivos/ensayo43.pdf>